

ESPAÑA EN RECESIÓN / Los empleados públicos

Los funcionarios se 'llevarán' el IPC

De la Vega garantiza a los sindicatos que la subida salarial no sea menor a la inflación- UGT: «El Gobierno no tiene intención de que pierdan poder adquisitivo hasta 2012»

BEGOÑA P. RAMÍREZ / Madrid

Los funcionarios mantendrán su poder adquisitivo los tres próximos años, según el compromiso que el Gobierno hizo público ayer ante UGT, CCOO y CSI-CSIF en la primera reunión del recuperado Diálogo Social. Pese a que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega —que había convocado a los sindicatos—, les reclamó «contención salarial», el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, se ocupó de recalcar que su «caballo de batalla» será conseguir un «mecanismo» que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los 2,7 millones de trabajadores públicos.

Y lo hizo tras mostrar su satisfacción por el hecho de que la duración del pacto vaya a coincidir con la de la legislatura. «Escarmentamos con el acuerdo alcanzado en 1995 con el último Gobierno de Felipe González, que se negó después a cumplir el primer Ejecutivo del PP», recordó el responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul.

En cualquier caso, ni los sindicatos ni el Gobierno hablaron ayer de cifras; en concreto, de las incluidas en el documento que UGT y CCOO le habían presentado el lunes: una subida salarial del 1% en 2010 y el aumento según el IPC en los dos siguientes. «El Gobierno no ha dicho por dónde irán los tiros», explicó Lacuerda, «pero ha quedado claro que no tiene la me-



La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ayer, durante su reunión con los representantes sindicales de los funcionarios en el Palacio de la Moncloa. / EFE

nor intención de que los funcionarios pierdan poder adquisitivo en el resto de la legislatura». Al término de la reunión, la secretaria de Estado de la Función Pública, Carmen Gomis, destacó la existencia de «un marco con objetivos comu-

Moderación en el sector privado

El incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos registrados hasta el mes de agosto alcanzó el 2,67%, cifra ocho décimas inferior a la registrada en el mismo mes de 2008 (3,49%), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. No obstante, este porcentaje supera el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) que, según el dato avanzado de agosto, situó su tasa interanual en el -0,8%. Aún así, el incremento salarial pactado en convenio se mantiene en la senda de moderación en la que se instaló en el primer mes del año, con subidas inferiores al 3%. De hecho, lleva tres meses, desde junio, instalado en el 2,67%, informa Europa Press. Según los sindicatos, aún quedan pendientes de cerrar 1,5 millones de convenios, con efectos sobre 4 millones de trabajadores.

nes», pese a las «discrepancias», que no quiso precisar.

Tanto Gomis como los representantes sindicales elogiaron la «buena voluntad» y el «ambiente cordial y constructivo» en que se había desarrollado el primer contacto entre

los agentes sociales y el Ejecutivo. «Esta reunión debería servir como ejemplo a quien no ha sido capaz de mantener el Diálogo Social», reprochó Fossoul a la patronal que, a su juicio, ha visto la crisis como «una ocasión para sacar ventaja».

La secretaria de Estado de la Función Pública aseguró que ayer quedaron sentadas las tres bases para un acuerdo: los funcionarios no perderán poder adquisitivo, se desarrollará el Estatuto Básico del Empleado Público y se adecuará la oferta de empleo público a «las nuevas necesidades de la sociedad española».

Fossoul señaló incluso que la Administración debe ser «el motor del empleo» en España, «porque hay capacidad para ello». Preguntados por el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre una «restricción radical» de la oferta pública de empleo, los representantes sindicales matizaron

que, en la actual coyuntura de crisis, «no puede ser una oferta al uso», pero que, en cualquier caso, no podrá «deteriorar los servicios esenciales» que presta el Estado. Y citó la sanidad, la educación o las Fuerzas de Seguridad.

«No creo que el Gobierno esté en disposición de transferir al sector privado plantillas fundamentales para prestar un servicio público de calidad», aseguró por su parte Julio Lacuerda, «no lo veo coincidiendo con la CEOE en que debe haber más privatizaciones en tiempos de crisis». De ahí que también destacara la necesidad de luchar contra la tentación de elevar la temporalidad del empleo en las administraciones públicas, especialmente altas en los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

A ese respecto, Fossoul recordó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que «no puede congelar los salarios» de sus funcionarios, como había anunciado. «No puede», añadió, «modificar las retribuciones básicas que acordemos aquí, así lo dice la ley. Lo mismo que las limitaciones a la tasa de reposición [para combatir la temporalidad], que obligan a todas las comunidades autónomas».

Los sindicatos y el Gobierno comienzan hoy la primera reunión técnica, con el fin de alcanzar un acuerdo antes del próximo día 25, fecha en que deberá estar definido el anteproyecto de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, incluido el régimen salarial de los empleados públicos.

Y lo hará en un momento de dificultades económicas en que, como reconoció el representante de UGT, precisamente los salarios pueden ser elementos de «contraste, críticas recíprocas y desacuerdos».

Sueldos públicos en tiempo de crisis

> «El Gobierno nos ha reclamado contención salarial, pero también nos ha prometido mantener el poder adquisitivo de los empeados públicos», resaltó el representante de UGT, Julio Lacuerda.

> «Estamos satisfechos de estar negociando con el mismo Gobierno que tendrá que hacer realidad el acuerdo al que llegamos, no como ocurrió en 1995, cuando Aznar congeló los salarios, incumpliendo el acuerdo alcanzado con el último Gobierno de Felipe González», recordó Lacuerda.

> «La oferta pública de empleo en una época de crisis», explicó Enrique Fossoul (CCOO), «no puede ser una oferta al uso, pero tampoco debe reducirse y poner en peligro servicios fundamentales como la sanidad, la educación o las Fuerzas de Seguridad».

> «Esta reunión debería ser un ejemplo para la CEOE, que ha visto la crisis como una ocasión para sacar ventaja», aseguró el representante de Comisiones.